

Encuentro hacia un nuevo proyecto de país

- 1) Introducción.
- 2) El régimen político-económico del bipartidismo español
 - a) La inserción europea de la economía española
 - b) El modelo español: clientelismo y corrupción
 - c) Otra vuelta de tuerca: la estrategia de la troika
 - d) La ruptura del pacto constitucional desde arriba
- 3) Las respuestas sociales: de las huelgas generales a las marchas por la dignidad
 - a) Las huelgas generales y el sindicalismo
 - b) El 15M, la PAH y Rodea el Congreso
 - c) Las marchas por la dignidad
- 4) Otra cultura política
 - a) El 15 m y la quiebra de los paradigmas políticos surgidos de la Transición
 - b) Republicanismo y participación democrática
 - c) La precarización de la juventud, elemento generacional de la crisis política
- 5) El instrumento: Izquierda Unida y los procesos de convergencia
 - a) El origen de Izquierda Unida
 - b) El bloque social y político: hegemonía y el partido orgánico
 - c) Izquierda Unida ante el momento histórico: riesgos y oportunidades

1. Introducción

Casi seis años después de que se iniciara la crisis económica, el camino elegido por el bipartidismo consolida una realidad marcada por una profunda transformación del modelo de sociedad fruto de la transición democrática en España. El Estado Social que contenía las conquistas sociales de décadas de lucha se ha transformado en apenas seis años en una sociedad con niveles de desigualdad insostenibles y con características de distribución de la riqueza y atención social propias de una sociedad en vía al subdesarrollo.

El ajuste económico impuesto por la política europea, y desde un paradigma neoliberal propugnado por el bipartidismo, se ha producido a costa de los salarios directos e indirectos de la clase trabajadora.

Las condiciones de vida materiales de precarización, inseguridad y desatención pública de la mayoría social contrastan brutalmente con el mantenimiento de los privilegios de una pequeña élite de gobernantes, empresarios y financieros. Todo ello ha provocado sucesivas oleadas de indignación popular que se suman a las anteriores movilizaciones contra la política económica de austeridad.

Así las cosas, lo que se inició como crisis económica se convirtió en una profunda crisis política e institucional, pero también ideológica, que permite impugnar un régimen político-económico incapacitado para cumplir el objetivo de garantizar el bienestar de la mayoría de la población.

La crisis y, sobre todo, la forma en la que los Gobiernos la afrontaron a través de las reformas estructurales, los ajustes y los recortes, ha evidenciado que el sistema capitalista es un régimen injusto y depredador que se funda en la explotación de la mayoría de la sociedad. Esas reformas impuestas no solamente no resuelven o palián la difícil situación de millones de españoles, sino que la agravan. El régimen político-económico ha aparecido así ante el imaginario colectivo, no como el instrumento para buscar el bien común, sino como el instrumento de la clase dominante para avanzar hacia una sociedad más injusta. La deslegitimación o crisis institucional ha resultado inevitable.

La batalla ideológica, en consecuencia, sigue más viva que nunca. Y a ello ha contribuido también que los poderes económicos salieran de detrás de las bambalinas y no dudaran en situarse en el centro del escenario para exhibir su capacidad de determinar las decisiones políticas. Por eso en la X Asamblea reivindicábamos la vuelta a la política y la democratización de la economía. Y ahora lo ratificamos en el proceso de Convergencia.

Destacamos que la Convergencia ni es una respuesta defensiva a los resultados electorales de las europeas, ni un movimiento táctico cara a las elecciones autonómicas y municipales, sino una fase imprescindible de la consolidación del proyecto alternativo de la izquierda transformadora en España. Y ello en un momento en el que el malestar social, la profundización de las desigualdades sociales y la crisis del bipartidismo permite aspirar a ocupar espacios de poder institucional que hagan realidad las ansias de transformación.

Ya en los documentos de la X Asamblea de IU diagnosticamos la salida impuesta a la crisis como *un golpe de estado silencioso, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que dejaba sin efecto la constitución del 78, nuestra soberanía nacional, imponiendo un contra proceso constituyente que pretende hacernos retroceder a valores de los años 50 recortando derechos libertades y la propia democracia. Y saludabamos el regreso de la movilización social para confrontar con las políticas neoliberales, desde la huelga de 2010,..., el 15M, han dado un salto cualitativo para situar la cuestión democrática en un primerísimo plano. Se trata de la vuelta de la política.*

Desde la celebración de la X Asamblea hasta hoy, la actividad de Izquierda Unida en el conjunto del Estado se ha centrado en el mantenimiento del conflicto social, en la actividad institucional de denuncia y propuesta de alternativas a las políticas que tanto sufrimiento social generaban. En definitiva, en el despliegue político y organizativo del conjunto de militantes y cargos públicos de IU con el objetivo de la conformación de un bloque social y político capaz de disputar la hegemonía al bipartidismo para la apertura de un proceso constituyente que alumbrara un nuevo proyecto de país.

No es baladí recordar este ingente despliegue. Tenemos la obligación política y moral de reconocer el valor de la militancia y de los cargos públicos de IU, como referentes de la dignidad de la acción política e institucional en todo el Estado.

Como decía el informe al Consejo Político que aprobó la celebración del encuentro político que ha de debatir el presente documento, *con absoluto orgullo es de justicia felicitar al conjunto de a militancia de IU, pero el mismo informe también señalaba, ante los resultados de las últimas elecciones europeas que, el orgullo de ser de IU, de sentirnos satisfechos por los resultados, de situarnos como tercera fuerza política del país, no debe impedirnos constatar que ha habido un número importante de votos de descontento con el bipartidismo que no hemos sido capaces de convertir en apoyo explícito a nuestra organización.*

Del debate producido en dicho consejo, se concluye la satisfacción, generosidad, audacia y honda responsabilidad con la que IU quiere afrontar el momento histórico que vive el país. Estamos decididos a ampliar la cada vez más honda brecha en el bloque de poder del bipartidismo, y contribuir a la canalización de los deseos de la mayoría social, dispuesta a comprometerse políticamente con el cambio profundo que alumbre un nuevo proyecto de país.

Desde el reconocimiento de la necesaria mejora de nuestras formas de acción política, profundizando en la democratización de nuestra organización y dotando a nuestro programa y discurso político de mayor diversidad, frescura y emotividad, hemos hecho un llamamiento a la convergencia social y política. Una convergencia que nos permita seguir ahondando en la brecha abierta en el inicio del ciclo electoral que han supuesto las elecciones europeas. Todo ello en cada municipio y región del país, y sentando las bases para llevarnos a las elecciones generales con una nueva hegemonía capaz de protagonizar un proceso constituyente en el que se devuelva la soberanía al pueblo.

Desde estas premisas se aborda la celebración del encuentro que ha de debatir, de abajo arriba y de arriba a abajo, el conjunto de análisis y propuestas para la

acción política contenidos en este documento. Tenemos la ambición de compartir con el conjunto de la organización, el diagnóstico del momento y la estrategia colectiva que deberá ser traducida y adaptada a la realidad de cada territorio.

El momento electoral que se avecina, con las elecciones municipales y autonómicas, tiene especial relevancia. Tanto por el peso competencial de las autonomías en la gestión de los servicios públicos fundamentales, como por el potencial transformador que la acción municipal siempre ha tenido para una fuerza como IU, cuya mejor tradición se refleja en tantos y tantos municipios donde nuestra acción de gobierno ha sido marca distintiva del verdadero municipalismo de izquierdas.

Este encuentro y este documento, pretenden recuperar la máxima de pensar globalmente para actuar localmente, estableciendo en él, tanto el análisis de partida como el discurso político sobre el que asentar nuestra programa político para la construcción de un nuevo proyecto de país.

2. El régimen político-económico del bipartidismo español.

Sufrimos una crisis económica que ha devenido en crisis institucional y en crisis ideológica precisamente como resultado de su profundidad y gravedad. Estamos ante una crisis orgánica, sistémica o estructural, esto es, una crisis que manifiesta las contradicciones del modo de producción y que al no poder ser resuelta por el bloque social y político dominante (las élites políticas y económicas) también se traduce en crisis del propio bloque dominante. Es por lo tanto una crisis de régimen. La consecuencia política es que surge una oportunidad para disputar el poder político al bloque dominante. Sin embargo, nada de ello será posible si previamente no somos capaces de diagnosticar correctamente el carácter preciso de la crisis económica y los aspectos particulares del régimen político-económico en España.

La crisis económica que emergió entre los años 2007 y 2008 ha puesto en entredicho la hegemonía del neoliberalismo, programa civilizatorio que condensa los intereses de la élite política y económica. Sin embargo, y a pesar de ello, finalmente el proyecto neoliberal en su conjunto ha logrado instrumentalizar la crisis y ha salido fortalecido en las instituciones económicas y políticas de toda la Unión Europea.

No obstante, no podemos ver al neoliberalismo como un fenómeno estrictamente ideológico al que se le pueda disputar la hegemonía sólo en el ámbito de las ideas. Más al contrario, en realidad estamos asistiendo a la reestructuración de las clases sociales en el seno de las economías nacionales y también en el espacio de la economía política mundial. El proyecto neoliberal se presenta como una contrarrevolución que trata de asestar golpes de gracia a las conquistas sociales y económicas alcanzadas mediante la lucha social en el marco de los Estados Nacionales constituidos tras la II Guerra Mundial. Y para lograr tales objetivos el proyecto neoliberal se está sirviendo del marco institucional que se ha ido diseñando en las últimas décadas y que encuentra su cristalización más pura en la Unión Europea, a la vez que modifica las instituciones nacionales para adaptarla a sus necesidades. Es el caso de las numerosas reformas legislativas (llamadas reformas estructurales) e incluso de

las reformas constitucionales. En efecto, la actual crisis ha puesto al desnudo el verdadero rostro del proyecto europeo.

La inserción europea de la economía española

La Unión Europea realmente existente no es una articulación solidaria de las economías nacionales, ni menos aún la construcción de una Europa social, sino más bien un tablero de juego que han diseñado los grandes capitales europeos para fortalecer su posición en todo el mundo. En particular han sido los grandes capitales financieros los que han dominado el reciente proceso de construcción europea, diseñando una arquitectura institucional que ha combinado la globalización financiera y productiva con el acantonamiento de la política fiscal y laboral. El resultado de este proceso ha sido doble. En primer lugar se ha procedido a una reestructuración del peso del capital financiero sobre el capital productivo y de ambos sobre el trabajo, en beneficio del primero sobre el resto. El creciente peso y poder alcanzado por las grandes entidades financieras ha ido parejo a su creciente participación en la tarta de los beneficios empresariales. En segundo lugar se ha establecido un marco de competencia fiscal y laboral entre los países, tanto a nivel europeo como internacional, que ha presionado a la baja los salarios y la participación salarial en la renta. Ello ha debilitado el poder y capacidad de negociación de las organizaciones de trabajadores a la vez que ha producido enormes transformaciones productivas en las economías nacionales. En lo que se refiere a España estas transformaciones productivas han tomado la forma de un proceso de desindustrialización y otro de expansión de las relaciones laborales altamente precarias. Desde su inserción en la Unión Europea en 1986 España ha acentuado su rol de economía periférica y dependiente respecto a un centro económico y político situado en países como Alemania y Francia. Este carácter dependiente ha provocado una mayor debilidad estructural de la economía, así como la ha hecho más vulnerable a la competencia exterior.

Una competencia exterior que ya no es la que caracterizó a los años de posguerra -en los que sólo unos pocos países occidentales disfrutaban de un capitalismo industrial- sino que, por el contrario, se caracteriza actualmente por la existencia de muchos y nuevos actores económicos con gran capacidad competitiva en numerosos sectores industriales. En ese contexto económico e institucional el lugar de la economía española en la división internacional del trabajo queda a merced de la propia dinámica del libre mercado. Y dado el natural retraso de una economía capitalista como la española, desmantelada en sus formas industriales y en muchos sectores aún con rasgos propios de estructuras semif feudales, el horizonte neoliberal plantea un negro futuro para los trabajadores españoles.

Todo esto quiere decir que las características singulares de la economía española quedaron limitadas, en última instancia, por su modelo de inserción en la Unión Europea. Fueron las condiciones económicas y de competencia, que España aceptó a través de la firma de los tratados respectivos, las que determinaron el modelo productivo del país y, concretamente, su progresiva desindustrialización.

En este sentido, la crisis del capitalismo español es la manifestación de la falta de espacios de rentabilidad económica para el capital. Y precisamente por ello el propósito del proyecto neoliberal es ahora tratar de recomponer esos espacios

mediante un proceso generalizado de empobrecimiento y mayor explotación laboral. Dicha reestructuración supone la profundización del perfil dependiente de los países periféricos y de un mayor rol del libre mercado en los designios de la vida económica europea. Sin embargo, el propio diseño de la arquitectura europea ya implicaba tal tendencia, y si hasta ahora no había sido explícita era por la existencia de mecanismos tales como el endeudamiento público y privado que ocultaban la naturaleza real de la distribución internacional del trabajo en la Unión Europea.

Lo que encontramos en Europa son modelos de crecimiento simbióticos entre los países del centro y los países de la periferia de Europa. Mientras los países del centro de Europa han basado su crecimiento en la exportación de bienes y servicios, los países de la periferia han basado su crecimiento en la demanda interna y el endeudamiento privado. Estas son dinámicas que se han propulsado enormemente tras la llegada del euro, lo que revela que la propia arquitectura de la Unión Europea profundiza los desequilibrios comerciales y estructurales entre las economías dominantes, del centro, y las economías dependientes, de la periferia. La división internacional del trabajo toma un rol mucho más acentuado bajo el proyecto neoliberal, remarcando el carácter de mercancía de la fuerza de trabajo en todas partes del mundo. Asistimos pues a una pugna en el seno de Europa entre ricos y pobres en el seno de cada uno de los Estados europeos.

Todo ello lleva a un proceso progresivo de especialización económica y productiva de cada área económica y de cada país, donde el papel de la tecnología es fundamental. En última instancia se produce una profunda reestructuración de la división internacional del trabajo actualmente existente, cuya tendencia está dominada por la lógica de los intereses ligados al capital privado, es decir, aquella que busca exclusivamente las ventajas derivadas de menores costes de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, la retórica oficial según la cual las economías más dinámicas son aquellas que hacen mayores esfuerzos de contracción salarial es radicalmente falsa. El verdadero rol diferenciador entre las economías europeas se encuentra en la configuración de la estructura productiva de cada país y, por ende, en su productividad. El relativo éxito de economías como la alemana se deriva de su estructura productiva especializada en la producción de mercancías de alto valor añadido y no tanto en los procesos de congelación salarial de los años anteriores. Ello quiere decir que todos los esfuerzos que las economías periféricas realicen por la vía de la reducción salarial no sólo serán infructuosos sino que serán también contraproducentes.

En todo caso, el planteamiento del capital es profundizar en esta división territorial del trabajo que lanza a España a su periferización definitiva dentro de la actual economía mundial. La consecuencia de este proceso es el de una Europa desplazada, una España descentrada en la globalización y la generación de una formación social mucho más dependiente.

El modelo español: caciquismo y corrupción

El caciquismo y la corrupción son rasgos esenciales del régimen político y económico español. Sin embargo, estas prácticas no pueden explicarse únicamente en relación a la larga tradición de clientelismo del sistema político

español, sino que tienen que interpretarse a la luz de su funcionalidad con el modelo de crecimiento económico español vigente en las últimas décadas.

Efectivamente, el ADN del propio régimen político-económico es la corrupción. Ésta ha permitido lubricar las cuentas corrientes de las elites económicas y políticas. Pero las prácticas de los llamados pelotazos urbanísticos han sido únicamente posibles gracias a su papel en la promoción del crecimiento económico y a las reformas que la élite política ha ido aplicando en las últimas décadas de gobierno.

Todo ello en claro beneficio de una élite económica que ha sabido recompensarlo a través de procesos de financiación irregular de los partidos políticos y de favores de muy distinta naturaleza a determinadas personas de la elite política. El caso de la Gürtel, los escándalos de financiación irregular, los ERE irregulares o los fraudulentos cursos de formación en Andalucía son ejemplos paradigmáticos de una corrupción estructural que era causa y consecuencia de las estructuras clientelares instaladas en el régimen político-económico. Y que, naturalmente, tenían su otra cara de la moneda en la corrupción original de la elite económica, siempre dispuesta a transgredir la ley en aras del lucro privado.

Una serie de condiciones económicas fueron suficientes para que se desarrollara en el seno de la economía española el inmenso proceso de burbuja inmobiliaria que fue caldo de cultivo de la corrupción y el caciquismo. En primer lugar, el ya citado carácter dependiente y desindustrializado de la estructura española. En segundo lugar, las ingentes cantidades de dinero procedentes de la Unión Europea y que tuvieron como destino finalista el sector de la construcción. En tercer lugar, el desarrollo del sistema financiero que posibilitó el recurso sistemático al endeudamiento y a la utilización de fórmulas financieras complejas. Y en cuarto lugar, las reformas institucionales acometidas por la élite política, muy especialmente en materia urbanística y de vivienda.

En relación a esto último, hoy es común pensar en España como un país de propietarios de viviendas. Sin embargo, no siempre fue así. El censo de 1950 refleja, por ejemplo, que el 50 por ciento de las viviendas eran de alquiler. Esa modalidad era hegemónica en las grandes ciudades, pues alcanzaba el 94 por ciento de las viviendas en Madrid y el 95 por ciento en Barcelona. La dictadura franquista, con objeto de evitar altercados sociales y entre otras medidas, buscó formas de solucionar el hacinamiento habilitando a los ayuntamientos para recalificar y reclasificar terrenos con facilidad. Comenzaba de esa forma una estrecha relación entre la élite política municipal, con capacidad de modificar la naturaleza legal de los terrenos, y la élite económica. Una relación que habitualmente termina en pelotazos urbanísticos.

Tras la Transición, en España se instó a las empresas a vender todo su stock de viviendas de alquiler barato, en muchos casos a los propios inquilinos, y se profundizó la vinculación entre la elite política y la élite económica tanto extranjera como nacional. Así, los pelotazos inmobiliarios y los macroproyectos no rentables (como aeropuertos, parques temáticos o largas autopistas) han servido para generar empleo y riqueza (en términos del PIB), a la vez que proporcionaban inmensos beneficios a los propietarios de las empresas y los concejales corruptos. La banca, participada por las grandes empresas constructoras e inmobiliarias y propietaria a su vez de ellas, ha formado parte del

modelo. En efecto, la vinculación entre las cajas de ahorro y las empresas de la construcción que participaban en la burbuja inmobiliaria fue mediada por la élite política municipal, que tenía la capacidad de recalificar terrenos, pero también de facilitar la concesión de préstamos. Se daban todos los ingredientes para mantener una estructura rentista funcional para el desarrollo de la burbuja inmobiliaria.

En definitiva, con la entrada de la financiación europea y con las nuevas condiciones económicas, los procesos ya vigentes en el franquismo en relación con el urbanismo se profundizaron y multiplicaron. En todo caso, la transición política no supuso una ruptura con todos los elementos anteriores, pues no se combinó siquiera con una transición económica. Como consecuencia de ello, las viejas elites franquistas, enriquecidas tras la guerra, mantuvieron su poder económico aún en el marco de la democracia. Un poder muy provincial, vinculado al territorio y a una estructura económica muy poco desarrollada industrialmente.

No obstante, no podemos meter a todo el municipalismo en el mismo saco, aún reconociendo la gran corrupción existente en nuestro país y especialmente durante la expansión de la burbuja inmobiliaria de finales del siglo XX y comienzo del XXI y el alto grado de privatización de los servicios públicos en las últimas dos décadas.

Podemos asegurar que la corrupción vinculada al ladrillo ha tenido la complicidad del Gobierno Central al determinar que todo el suelo no protegido era urbanizable. A la complicidad de los Gobiernos Regionales por no ejercer el debido control de los desarrollos urbanísticos salvajes y aprobar la recalificación de los terrenos, sin que obedeciera a necesidades de demanda poblacional; por dejar todo el negocio inmobiliario en manos de los agentes privados al no contemplar una suficiente reserva de suelo para vivienda pública y no obligar a los promotores a la construcción de vivienda protegida en un porcentaje de al menos un 50%; por permitir –junto al Gobierno Central- que el coste del módulo esté en parámetros similares a la vivienda de renta libre.

Al margen de las malas prácticas de las cajas de ahorro al otorgar créditos sin garantías -gobernadas por los propios partidos políticos que daban el visto bueno a los proyectos especulativos, ejerciendo, además, presión sobre los cargos locales para que estos se tramitaran-; y de que algunos indeseables han aprovechado el cargo público para enriquecerse. La falta de financiación de los Ayuntamientos y la “obligación” de asumir competencias impropias para satisfacer las necesidades de sus vecinos, junto con la necesidad de hacer caja, han sido elementos fundamentales y el caldo de cultivo necesario para que se dé la especulación y la corrupción vinculada al ladrillo en nuestro país.

No obstante, nos equivocáramos si la corrupción sólo la enmarcáramos en el negocio inmobiliario. Los servicios públicos y la privatización de los mismos, están siendo el gran nicho de negocio de las empresas privadas. Son muchos los casos de corrupción vinculados a los contratos y adjudicaciones de obras, servicios y suministros. No sólo lo dicen la opinión pública y los medios de comunicación; lo confirman los jueces con los procedimientos abiertos y las sentencias condenatorias. Presidentes de gobiernos autonómicos y de diputaciones provinciales; consejeros y diputados; alcaldes/as, concejales/as,

directores... y un largo etcétera. Hasta la casa real está inmersa en estos casos de corrupción.

Se trata, en definitiva, de un régimen político-económico que ha permitido, cuando no promovido directamente, todo este tipo de prácticas que merman la capacidad productiva de la economía y la capacidad de emplear socialmente la riqueza del país. El propio diseño institucional del régimen político-económico tiene alta responsabilidad en ello, puesto que no han existido mecanismos efectivos anticorrupción, ni transparencia suficiente ni se ha conseguido evitar que las elites políticas y económicas se impusieran a la voluntad colectiva.

Otra vuelta de tuerca: la estrategia de la troika

La crisis económica ha tenido como una de sus consecuencias más dramáticas el crecimiento espectacular de la tasa de desempleo, el paro. Despojando a los trabajadores de la fuente material de su vida cotidiana, el régimen político-económico ha empujado a la miseria y a la pobreza a cada vez sectores más grandes de la población. Pero según se acrecienta este ejército industrial de reserva también se fortalecen las dinámicas de incremento de la explotación laboral de aquellas personas que aún tienen empleo.

En ese contexto, y con el modelo de acumulación o crecimiento económico español agotado, las instituciones europeas y los gobiernos han acelerado las medidas económicas de desmantelamiento de los servicios públicos y de las conquistas sociales. De esta forma se procura apuntalar un modelo de sociedad altamente regresivo y caracterizado por la precariedad laboral y el incremento de la desigualdad. Una reestructuración de las clases sociales que transforma radicalmente la estructura social del país.

Naturalmente, el objetivo principal de la troika y del bipartidismo no es el empobrecimiento de la población per se sino la recomposición de espacios de rentabilidad en España. Lo que sucede es que esa recomposición se busca mediante los conocidos como planes de ajuste, los cuales son reformas estructurales que dinamitan las anteriores instituciones políticas y económicas, heredadas del llamado "Pacto Social de Posguerra", en favor de otras nuevas que faciliten la movilidad y ganancia del capital.

Estos planes de ajuste se caracterizan por exigir la consolidación fiscal (reducción de la deuda pública, reducción del gasto público e incremento de los impuestos indirectos), el control de la inflación, reformas en el mercado de trabajo (reducción salarios públicos, reducción poder sindicatos, reducción prestaciones por desempleo) y reformas sociales (fragmentación educación, elevación edad jubilación, etc.). Son cualitativamente idénticos a los fracasados planes de ajuste aplicados en América Latina en los años ochenta y noventa.

La aplicación de estas políticas de ajuste empujan a las economías de la periferia europea a un cambio del modelo de crecimiento económico que requiere a su vez un cambio del modelo de sociedad. La destrucción de las conquistas sociales es un requisito indispensable para el proyecto neoliberal en tanto que son obstáculos a superar para convertir nuestras economías en estructuras competitivas bajo el capitalismo globalizado. Al menos bajo su análisis teórico. Pero esta senda política amenaza a Europa del Sur con una gran depresión que ya está revelándose en la forma de altos niveles de

desempleo, incremento de la miseria y la desigualdad y otros rasgos propios de una grave crisis capitalista.

Todas estas reformas amenazan con establecer un nuevo orden social que podemos llamar neofeudalismo. Este orden social tendrá una pequeña élite que tendrá todo el control político y económico sobre los recursos, medios de producción, acceso a la educación, cultura y al poder político, y donde sin embargo la mayoría vivirá en una economía de sumisión y supervivencia.

Otro agravante de la situación es el proceso de socialización de las pérdidas y la deuda. Las medidas de los gobiernos europeos dicen buscar corregir el déficit presupuestario a través de un descenso de los gastos públicos, lo que supone un retroceso más del Estado del Bienestar, y en cierta medida en un incremento de los ingresos, sobre todo vía impuestos indirectos (que son regresivos porque afectan por igual a ricos y pobres). Pero si a ello sumamos todas las medidas contracíclicas, ineficaces por su limitado alcance, y sobre todo los costosísimos procesos de rescate de las entidades financieras, tenemos una espiral de endeudamiento no sólo inmoral sino también imposible de pagar.

Así las cosas, el impago de la deuda es una necesidad imperiosa para los países que están atrapados en este círculo vicioso, si bien por supuesto no es la única medida imprescindible. No obstante, una cosa es reestructurar la deuda y otra es impagar la totalidad de la misma. La reestructuración supone diferenciar los diferentes contratos de deuda asumidos por el Estado y modificarlos en plazo, en cantidad o incluso cancelarlos parcial o totalmente. Es precisamente esto lo que se está reclamando como inaplazable.

La ruptura del pacto constitucional desde arriba

En todo caso, para que las reformas estructurales o planes de ajuste de la troika puedan ponerse en marcha se necesita la colaboración de los gobiernos de los países en cuestión. Ese soporte político imprescindible para convertir en leyes los deseos de la troika, y en consecuencia, de las necesidades de la elite económica, lo brinda el bipartidismo en España.

En efecto, nos encontramos en el contexto histórico de modificación de las instituciones políticas para adecuarlas a las necesidades de la elite económica y del capitalismo. Pero este momento político no comenzó con la crisis, sino que se remonta a mucho antes. Coincidiendo con la construcción de la Unión Europea se han ido aprobando una serie de normativas, tratados y modificaciones institucionales que han vaciado de contenido material las garantías establecidas por la Constitución de 1978.

Durante décadas se ha ido delegando la capacidad efectiva de tomar decisiones, sobre aspectos determinantes del funcionamiento de las economías, en instituciones supranacionales muy alejadas de los trabajadores. Y este proceso ha ido necesariamente acompañado de la desmembración interna de las propias estructuras democráticas que vertebran los Estados (democracia local, ayuntamientos, negociación colectiva...). De este modo la soberanía popular efectiva se desplazaba desde las constituciones nacionales hacia formas institucionales de nuevo rol tales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional –la troika-.

Ese nuevo escenario institucional ha facilitado la aprobación, siempre con la complacencia de los gobiernos, de las reformas estructurales de ámbito económico. Las reformas del mercado de trabajo no han tenido otro objetivo que reducir el poder de negociación de los sindicatos, con lo que se ha tratado siempre de lograr un mayor nivel de moderación salarial que eleve la ganancia empresarial. Por otra parte, las reformas en la gestión de los servicios públicos está siendo todo un proceso de acumulación por desposesión, en el que se incrementa el mercado del capital privado en espacios hasta entonces ajenos al negocio privado. Aún estamos en una fase incipiente de estos desarrollos propulsados por el proyecto neoliberal.

Con la firma del Tratado de Maastricht, en 1992, España aceptó unas duras condiciones macroeconómicas, inspiradas en el ideario neoliberal, que llevaron a una acentuación en el proceso de desindustrialización. Pero durante los últimos años los programas neoliberales de la Unión Europea, especialmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), se han fortalecido con nuevas regulaciones complementarias. Todas tenían como objetivo apuntalar el proyecto neoliberal. El PEC estaba basado en el mantenimiento de niveles inferiores al 3% en el déficit público y al 60% en la deuda pública en términos del PIB, lo cual limitaba el margen de maniobra de los gobiernos. En septiembre de 2011 el Parlamento Europeo aprobó el conocido como Six-Pack, un paquete legislativo centrado en la consolidación fiscal y en las medidas que teóricamente aseguren la competitividad de las economías europeas, y que describe de forma precisa el proyecto neoliberal.

Pero por su importancia cualitativa cabe señalar la aprobación en 2010 del Nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, el cual implicaba la necesidad de que las legislaciones nacionales incluyeran el compromiso explícito con la estabilidad presupuestaria. Se trataba de un llamamiento explícito a constitucionalizar el proyecto neoliberal y a situarlo en lo más alto de la normativa jurídica. Ello ocurrió definitivamente en España en 2011. La reforma constitucional del Artículo 135, pactada por PP y PSOE, y que establecía el concepto de “estabilidad presupuestaria” y la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses, fue la expresión política más clara del grado de acuerdo y consenso en el seno del bipartidismo para hacer pivotar el proyecto europeo sobre este dogma neoliberal que asfixia y recorta al modelo social europeo.

Como se ha señalado, en el marco español este proceso está caracterizado por el soporte político que los dos principales partidos políticos y la misma monarquía brindan a la transformación social en curso. A pesar de ello, los pilares sobre los que se apoya este proceso radical se van debilitando durante el proceso, ante lo cual se buscan formas comunicativas y políticas de remediarlo.

De ahí que también nos encontremos ante un escenario de desdemocratización del régimen político-económico español. Y es que ya no sólo se trata de adaptar las instituciones a las necesidades del capitalismo sino de rediseñarlas con objeto de que las alternativas no encuentren espacio político. Ese es el significado real de las reformas electorales y del creciente estado de represión policial en el que vivimos.

Al fin y al cabo la transformación institucional requerida implica asimismo una radical transformación social ante la que los ciudadanos se rebelan. La

frustración crece y se va acumulando, pareja al ritmo de adecuación institucional, y amenaza con estallar en graves conflictos sociales.

Pero a la vez, y vista la hostilidad con la que los ciudadanos están respondiendo ante tal proceso, también se acelera una huida hacia delante en el proceso de desdemocratización de las instituciones públicas españolas. Y aquí el papel de la Unión Europea es crucial en tanto que sirve de camisa de fuerzas para aplicar las reformas a la vez que proporciona un aurea de legitimidad construida más por mitos que por hechos.

En definitiva, el bipartidismo es responsable directo de la aplicación y legitimación del proyecto neoliberal en España. Es el sujeto político que aprueba las reformas estructurales y que pone en marcha todo el aparato de represión y coerción del Estado para evitar que surjan las alternativas políticas. Pero es también el responsable de la ruptura del pacto institucional que tuvo lugar en 1978 y que cristalizó en una Constitución que, con todas sus deficiencias, ponía sobre el papel conquistas sociales alcanzadas por el movimiento obrero y la lucha social.

3. Las respuestas sociales: del 15M a las marchas por la dignidad

Los efectos de la crisis económica y de su gestión neoliberal han provocado un incremento de la frustración y rabia de la ciudadanía. Este nuevo comportamiento subjetivo se ha canalizado de diversos y muy diferentes modos en los últimos años, cristalizando de hecho en huelgas generales, movilizaciones sociales y en la ruptura de la dinámica electoral. Todos estos fenómenos son parte del escenario contestatario que se ha creado muy rápidamente, y conviene analizarlo para entender el momento sociopolítico que atravesamos.

Las huelgas generales y el sindicalismo

Los sindicatos organizaron una huelga general el 29 de septiembre de 2010, y en medio de un ataque brutal de la derecha contra las organizaciones de trabajadores. La derecha estaba dispuesta a arrasar cualquier movimiento de izquierdas organizado y la huelga del 29 de septiembre fue un respiro.

La firma del pacto de las pensiones por los sindicatos, a principios de 2011, fue un duro golpe para la parte más contestataria de la sociedad. Izquierda Unida, que venía reclamando una huelga general desde un año antes, se negó a participar en aquel pacto.

Sin duda, el sindicalismo ha sido históricamente la herramienta de las clases trabajadoras para frenar los brutales ataques del capitalismo. No es baladí recordar que el proyecto de transformación social capitaneado por Margaret Thatcher tuvo como enemigo claro al sindicalismo de clase. Y en esta misma línea los poderes fácticos del país han situado al sindicalismo como objetivo político, buscando con ello dismantelar uno de los pocos espacios de resistencia civil organizado al avance del proyecto neoliberal.

Siendo esto así, y mantenido el convencimiento sobre la importancia de la articulación sindical de las clases trabajadoras, es imprescindible ser riguroso en el diagnóstico del momento político y la potencialidad de sus diversos actores.

A este respecto cabe profundizar en dos ejes de análisis. De un lado, la articulación del sindicalismo actual en relación con el sistema productivo. De otro lado, la acción político-sindical de las grandes centrales en momentos cruciales de disputa política.

Un modelo único en un mercado dual

Los dos principales sindicatos de clase tienen su origen en el mismo proceso de alumbramiento del sistema político, una transición en la que no era imaginable la construcción de la democracia sin el ejercicio de la libre sindicación. A pesar de la evolución del proceso de la Transición, y de los resultados actuales del mismo, no podemos olvidar que es la acción de las comisiones obreras originarias en la estructura del sindicato vertical una de las piezas claves en el empuje social que obligó al régimen franquista a la reforma política iniciada en el 77.

La politización de las luchas laborales que se dieron en la primera crisis del capitalismo español en los años 60 fueron cruciales en el empuje social para la transición democrática. El modelo de sindicato que se inicia con aquellas comisiones obreras tenía una vinculación clara con el modelo productivo del desarrollismo franquista. La articulación en las fábricas y en los sectores de producción alumbró un modelo sindical propio del *fordismo* y permitió la consecución de importantes victorias políticas no sólo en la transición, sino también en los inicios de una democracia que no tardó en sentirse incómoda con una lucha sindical que cuestionaba desde sus comienzos el devenir socioliberal del PSOE.

Sin embargo, el proceso de transformación productiva iniciado con las primeras reconversiones industriales y que eclosionó con el boom inmobiliario de finales de los 90 y el inicio de siglo, no fue acompañado por una transformación de las estructuras sindicales que fueran capaces de mantener una amplia organización de la clase trabajadora en las nuevas realidades de dualización del mercado laboral. Así las cosas, las principales centrales sindicales mantuvieron su capacidad de lucha y freno a los abusos del capital en aquellos sectores donde se mantenía un mercado laboral estable. Pero quedó progresivamente ausente de la vida laboral de buena parte de la población que iniciaba su vida laboral como un rosario de contratos precarios e inestabilidad laboral que dificultaba la organización sindical.

La combinación de esta realidad de amplios sectores de la población laboral no sindicalizados y el empeño de los poderes políticos, especialmente con el avance del PP, por desprestigiar y debilitar el sindicalismo llevaron a un inicio del siglo XXI en el que las luchas sociales y políticas no siempre han estado conectadas con la lucha sindical. Sin embargo, no es justo identificar dichas dificultades con la desaparición del sindicalismo ni con la pérdida de su capacidad de influencia social y lucha política. En la fase de políticas de austeridad y destrucción masiva de empleo que inaugura la crisis, han sido los trabajadores sindicados de los servicios públicos, y la organización de los trabajadores de grandes empresas afectados por EREs brutales quienes han mantenido buena parte del conflicto social y político que ha sumado sus luchas a los nuevos movimientos de indignación y autorganización popular.

No corresponde a una organización política como IU establecer las estrategias del sindicalismo para salir de la situación de desprestigio y dificultades de

organización de las nuevas realidades laborales garantizando la pervivencia de un movimiento imprescindible del cambio social. Pero sí nos corresponde evidenciar que esta realidad existe y que, por tanto, hemos de ser capaces de trabajar políticamente desde el respeto a la autonomía sindical. Los objetivos son la interconexión de todos los espacios de lucha y la colaboración en la recuperación de los puntos de conexión de aquellos movimientos que han podido tener desarrollos disfuncionales entre sí. Sólo de la suma del conjunto de agentes organizados por la transformación será posible el avance de un amplio bloque social y político.

El papel de los sindicatos en el proceso político.

Desde el inicio de la transición, los sindicatos de clase mayoritarios han jugado un papel fundamental en la resistencia a las medidas de empobrecimiento y precarización de las clases trabajadoras. Sin duda, de no haber existido la lucha sindical, la realidad del mercado laboral habría sido más dura y habría empeorado mucho antes de la crisis de 2008. Sin embargo, esta afirmación no puede negar que las estrategias sindicales desde los pactos de la Moncloa no han sido capaces de poner el foco en la globalidad de la apuesta política por la que se deslizaba el bipartidismo.

El pacto transicional en el aspecto económico laboral, recogido en la constitución y en los pactos de la Moncloa, nunca se dotó de las herramientas para garantizar el cumplimiento de la parte del capital del mismo. Ello ha devenido en que sean las clases trabajadoras las que hayan soportado las consecuencias de la transformación productiva, y que se haya producido la ruptura del pacto por arriba sin que éste haya tenido consecuencias políticas. El sometimiento de la riqueza del país al interés general, la participación de los trabajadores en los medios de producción, la obligatoriedad de un sistema fiscal suficiente y progresivo han quedado desdibujados en un marco de política económica impuesto por los poderes europeos ante el que los sindicatos no pudieron o no supieron hacer frente, llegando incluso a respaldar una constitución europea que amenazaba las conquistas históricas del propio sindicalismo.

Así las cosas, la institución sindical no se ha librado, como los partidos políticos, de la crisis institucional en la que ha devenido la crisis económica que se iniciara en 2008. Sin duda es imprescindible mantener el reconocimiento a la necesidad de la organización sindical como eje vertebrador de la lucha y de los nuevos bloques sociales y políticos que puedan disputar el poder, pero no es menos cierto que dicho reconocimiento y valor se recoge más en las luchas parciales de determinados colectivos, y en la defensa de los sindicalistas amenazados de cárcel, que en los acuerdos con las direcciones sindicales que no terminan de reconocer a nuevos actores ni de poner su fuerza social al servicio de las luchas colectivas.

La huelga del 29S sin duda fue una apuesta exitosa por demostrar la capacidad de acción y lucha de los sindicatos de clase. Y esa lucha es necesaria frente a gobiernos que respaldan sin ambages la ruptura del acuerdo marco de reparto de riqueza, posicionándose en favor del capital hasta el punto de haber consolidado en la última reforma laboral la práctica desaparición de la negociación colectiva.

Sin duda es un reto del nuevo tiempo político la defensa de la lucha sindical así como avanzar en el empuje de la implicación del sindicalismo en las nuevas movilizaciones sociales que están configurando los espacios de construcción del nuevo bloque social y político llamado a disputar la hegemonía al bipartidismo.

El 15M, la PAH y Rodea el Congreso

El pasado mes de mayo se cumplían cuatro años de la ocupación del espacio público por un movimiento de ciudadanía indignada que pasó a conocerse en todo el mundo como el 15M. En paralelo, y desde 2009, la Plataforma de Afectados por la hipoteca iniciaba su andadura, siendo en 2012 con la campaña de recogida de firmas por la ILP contra los desahucios cuando adquiere máximo protagonismo y respaldo ciudadano a su causa. No es posible analizar el desarrollo de la crisis política sin analizar lo que implicó aquella explosión de movimiento popular ni las sucesivas replicas y derivaciones del mismo como los movimientos de Rodea el Congreso.

Tanto el 15M como la PAH y el Rodea el Congreso adquieren protagonismo por la modificación de los repertorios de lucha en relación con movimiento sociales y políticos precedentes, y se convierten en un eje de vital importancia para la crisis político al incluir una modificación sustancial en el sentido común de época.

El 15M, arranca como una reacción a la desproporcionada intervención policial para desalojar a un grupo que acamparon en la plaza de sol tras una manifestación. Sin duda, la importancia mediática que adquiere inicialmente, responde al desconcierto que producen las protestas, y a un intento de diferentes medios de que el mismo influya en los resultados electorales de las municipales. Con el PSOE en el gobierno del Estado, y un PP agitando las consecuencias de la crisis económica como eje central de su campaña, la protesta ciudadana es inicialmente percibida como una oportunidad de desgaste al partido de gobierno y por tanto de la potencial recogida de réditos del resto de partidos. De manera muy rápida, la mecha de indignación y protesta se extiende a otras ciudades españolas y la voluntad de manejo de la misma se va de las manos, entrando en una fase de intento de desmovilización de la misma para la celebración de unas elecciones “tranquilas”.

La resistencia de la ciudadanía al abandono de las plazas inaugura un proceso de protestas y organización popular que no evitó el triunfo electoral del PP, ni consolidó un nuevo movimiento político pero que sin duda generó un fuerte impacto en la conciencia ciudadana.

El 15-M supuso un punto de inflexión en el escenario de crisis: fue el chispazo para activar subjetivamente a la sociedad ante la situación objetivamente dramática que ya vivíamos. El rechazo a las medidas anticrisis iniciadas por el partido socialista en 2009 se orientaron en el entorno de las plazas del 15M a una intuitiva impugnación del sistema de representación política y el modelo democrático que garantizaba el rescate a la banca frente mientras desprotegía a las mayorías sociales.

La mezcla de condiciones materiales de aumento de paro y recortes de servicios públicos de cada vez más gente, con sucesivos escándalos de corrupción inauguró un nuevo marco de interpretación de la crisis en la que se señalaba la falta de voluntad de los representantes públicos para poner freno a los abusos

del poder económico. La importancia del 15-M no se limita a sus momentos de “explosión”. El incremento de la movilización social ha sido exponencial desde la aparición del movimiento, no solo en sus propias convocatorias sino en otras del movimiento sindical o movimientos por los servicios públicos, que se han contagiado de su dinamismo y su repertorio de acción colectiva. Pero, además, ha cambiado el enfoque de millones de personas que ahora mantienen una actitud más vigilante y crítica ante el desarrollo de la vida social y política. Hasta el punto de que ciertos discursos y razonamientos que antes eran compartidos solo entre sectores altamente concienciados y que sonaban radicales o exagerados, ahora se han convertido en parte del sentido común, de la opinión mayoritaria, aunque no siempre se exprese de manera compleja o bien fundamentada.

Muchos militantes de IU, acostumbrados a la participación política en barrios y ciudades se incorporaron como activistas a los movimientos y participaron el intento de descender de la acción centrada en las plazas principales a la actividad en los barrios y movimientos de base. Y si bien es cierto que el desarrollo de las asambleas del 15M ha sido desigual no es menos cierto que la impugnación al sistema que inauguran ha aumentado la brecha de ruptura con el régimen del 78, generando una oportunidad de reconquistar el significado social y político de conceptos fundamentales como democracia y consenso. De tal forma que en muchos sentidos se habla de un espíritu 15M sin el que no es posible entender el conjunto de cambios políticos y sociales que se vienen operando desde entonces.

No es menos cierto, que dicho movimiento trajo a las organizaciones políticas y sociales más tradicionales, especialmente a IU, una noticia positiva y otra negativa. La positiva es que buena parte de las reivindicaciones que empezaron a trasladar en propuestas concretas estaban directamente conectadas con los programas políticos que ha defendido IU desde mucho antes del inicio de la crisis. La noticia negativa es que el arranque de la movilización y su desarrollo no pasó por nuestros espacios políticos, pues en su reivindicación de más y mejor democracia también imponían un alto nivel de exigencia a los modelos de organización interna de los propios partidos políticos.

Sin duda, el paso del 15M al rodea el congreso fue aún más conflictivo, pues se focalizaba la atención de la responsabilidad de la crisis sobre la clase política y en numerosas ocasiones no se establecía diferenciación alguna entre diversas fuerzas políticas, haciendo una tabla rasa sobre la política catalogada por muchos como peligros. Sin embargo, el compromiso de IU con los movimientos, y la voluntad de estar del lado de la gente y no de instituciones que se evidenciaban como opacas, en ocasiones corruptas y sobre todo más preocupadas por el bienestar de los mercados que de la ciudadanía, nos sitúo en buenas condiciones para afrontar las campañas electorales con una apuesta clara por la rebelión democrática.

En relación con la PAH, lo crucial del movimiento es analizar las dos consecuencias que ha tenido para el sentido común de época. De un lado, el amplísimo respaldo de la ciudadanía a las reivindicaciones de la PAH han abierto un nuevo pensamiento hegemónico en relación con la vivienda. La intervención de la PAH en este sentido ha sido crucial para recuperar una amplia conciencia social en la consideración de la vivienda como un derecho fundamental de las familias que debe ser preservado. De otro lado, la

organizaciones de la ciudadanía en los momentos de desahucio como ejercicio de presión para evitar el desalojo de las familias, que ha logrado por la acción directa evitar el drama a miles de familias, ha contribuido a una nueva percepción de la posibilidad cierta de la organización social como elemento útil de protección colectiva de nuestros intereses y derechos. De nuevo, tras años de erial de lucha, las acciones de la PAH en miles de desahucios, y el éxito de luchas como la sanidad pública, la corrala, los barrenderos de Madrid, gamonal etc, vuelven a hacer creíble la utilidad de la organización social y la acción ciudadana en la vida cotidiana.

No podemos dejar de señalar la relación complementaria y necesaria que existe entre la lucha social en la calle y la lucha en el marco de las instituciones. Esto es algo que la presencia de IU en las instituciones ha puesto de relieve en el último año, particularmente con el conflicto surgido en el seno de la Junta de Andalucía como consecuencia de la comprometida política de vivienda. Una experiencia útil para hacer emerger las contradicciones del bipartidismo y del propio régimen político-económico.

Este breve retrato tan sólo pretende evidenciar que las luchas vividas en este tiempo han contribuido a mantener abierta y profundizar la brecha de oportunidad política para la transformación social. Han generado una oportunidad de conquistar una nueva hegemonía sobre la que construir una nueva forma de relación social y de articulación de lo colectivo. Si bien no podemos dejar de analizar las implicaciones de éstas luchas en ese nuevo sentido común en cuanto a las exigencias democráticas, de transparencia, de rendición de cuentas, que se imponen a los actores políticos con la voluntad de construir un nuevo proyecto de país.

Las marchas por la dignidad

Desde el inicio de las movilizaciones sociales fruto de la crisis, ya sean del 15M, rodea el congreso, las mareas en defensa de servicios públicos etc., ha existido una voluntad frustrada de unificar las luchas para lograr que el permanente conflicto social articule la potencialidad para derrocar un gobierno que no tiene la menor intención de atender a ninguna de las reivindicaciones sociales.

Según se ha ido incrementando la conflictividad social se ha hecho evidente para la mayoría de los movimientos que la demanda de cambio de rumbo de las políticas es una demanda condenada a la fracaso. Y que por tanto el objetivo debía centrarse en la ampliación del respaldo social a las luchas de oposición y autorganización de la alternativa con la voluntad que de ésta surgiera una nueva hegemonía social que impida un nuevo triunfo electoral de las fuerzas del bipartidismo.

Para ello, ha existido en diversos momentos de estos años un convencimiento de la urgencia y necesidad de agrupar las diversas luchas parciales de la educación, la sanidad, la vivienda, el agua etc, en una movilización unitaria que reivindicara la recuperación de unas condiciones de vida dignas para la mayoría social. En este marco de reflexión se trataron de unificar cada una de las mareas en una unidad de mareas ciudadanas que convocaron acciones conjuntas. Se lanzó también la convocatoria del sindicato andaluz de trabajadores, los campamentos por la dignidad de Extremadura y también del frente cívico de una apuesta arriesgada. Se trataba de la convocatoria de una gran marcha

ciudadana que partiera de todos los puntos geográficos del país y confluyeran en Madrid con un conjunto de reivindicaciones compartidas.

A este impulso no tardó en unirse IU y el conjunto de sus militantes, y otros colectivos y organizaciones sociales, y a pesar de las dificultades organizativas que implica una movilización social a escala estatal promovida por múltiples y variadas organizaciones, el 22M se convirtió en un nuevo éxito del movimiento social.

Los elementos de mayor importancia para el análisis político de las marchas desde la perspectiva de IU han de ser, en primer lugar, el éxito de las mismas a pesar de la ausencia de una apuesta clara de las estructuras sindicales en las mismas, y un absoluto vacío del proceso de movilización por parte de los grandes medios de comunicación. Sin duda, el despliegue de la apuesta por el conjunto de la organización, implicando a todas las asambleas y militantes de base del estado, nos ha de servir para asumir del potencial político y de organización social de nuestra organización, no sólo por el éxito de la misma, sino porque el desarrollo de la organización se ha producido en el marco de espacios políticos muy plurales en los que los cuadros de IU se han incorporado con naturalidad y han sido reconocidos como agentes imprescindibles. En segundo lugar, la ausencia del PSOE de la actividad de las marchas y la numerosa manifestación equiparable a las convocatorias del NO a la guerra han de convencernos del desplazamiento del PSOE del núcleo social y político de nuestro interés. Y ello tanto en su posición con respecto a las reivindicaciones las mismas y a los métodos de trabajo desde la base, como a la capacidad de convocatoria en su ausencia y sin la colaboración de los medios que le son afines.

Por último, el intento de criminalización de las mismas, fracasado en términos generales, pero que sin duda es utilizado como excusa para seguir la vía represiva, ha de dejarnos claro cuales son los marcos discursivos y repertorios de lucha en los que el enemigo nos quiere situar. Frente a una movilización que por su contenido de reivindicación y sus métodos de lucha aspira a conectar con ese nuevo sentido común que no encuentra explicación para que sus representantes político sigan empobreciendo a las mayorías para enriquecer a una minoría, con ayudas públicas a la banca o tramas de corrupción que siempre acaban con millones en suiza, quisieron dibujar una turba izquierdista violenta que se aleja del sentido mayoritario de la necesidad de un cambio, profundo pero democrático.

Desde estas reflexiones es imprescindible señalar la necesidad de seguir profundizando en nuestra implicación y reconocimiento de las nuevas luchas y la voluntad firme de construir con ellas el bloque social y político de mayorías que alumbrará un nuevo proyecto de país.

4. Otra Cultura Política

Una nueva concepción del mundo, aunque naciendo y en estado embrionario, está disputándole la legitimidad a la vieja concepción del mundo. Hablamos de culturas políticas, es decir, de paradigmas culturales a través de los cuales leemos e interpretamos la realidad política. Y en España y desde hace décadas el paradigma indiscutible ha sido la Cultura de la Transición o Cultura del 78.

Esta Cultura de la Transición, que desde 1978 hegemoniza toda interpretación política está caracterizada, entre otros, por los siguientes aspectos. En primer lugar, por el recurso permanente al consenso como instrumento resolutivo de conflictos políticos. En segundo lugar, por la orientación bipartidista y partidocrática de su sistema político. Y en tercer lugar, por la filosofía política elitista y reacia a la participación ciudadana en asuntos públicos. La Constitución del 78 es el documento donde cristaliza mejor esa Cultura de la Transición. No hablamos tanto del contenido -resultado de una correlación de fuerzas favorable a los reformistas del régimen franquista pero con elementos muy progresistas derivados de la presión del movimiento obrero- como de la cultura política que impregna el documento mismo.

Sin embargo, la Cultura de la Transición ha ido rivalizando con otra Nueva Cultura Política que, con poco éxito hasta hace unos años, le ha ido disputando el espacio. Una Nueva Cultura Política que se abrió paso a través de una interpretación abierta y flexible de la Constitución, con una filosofía política de participación ciudadana y de ruptura con las formas tradicionales de organización política que aparecen reflejadas en la propia Constitución. La irrupción de los nuevos movimientos sociales y la creación de organizaciones políticas organizadas de forma distinta a la de un tradicional partido político, han sido elementos clave en esta gestación. La propia fundación de Izquierda Unida, que renunció explícitamente a ser un partido político al uso para ser un movimiento político y social, representó rasgos de esta nueva cultura política.

Desde entonces los movimientos sociales, tanto por su contenido (feministas, ecologistas, municipalistas, etc.) como por su forma (fundamentalmente con organizaciones horizontales) han ido desbordando al régimen sociopolítico del 78. Sin embargo, sin lograr arrebatarse la legitimidad y la hegemonía. No obstante, proliferaron acciones políticas y propuestas clave (como los procesos de presupuestos participativos llevados a cabo en centenares de municipios gobernados por IU o las primarias de IU de 1996) que lograron sembrar esa nueva cultura política que hoy va creciendo rápidamente. Hoy es de sentido común muchas cosas que en 1978 parecían demandas propias de la marginalidad política.

Respecto a esto el hito más claro y reciente ha sido el del 15-M, que puso de manifiesto no sólo la frustración de la gente con un orden político y económico que les arrebatara derechos y esperanzas, sino que también puso de relieve que la nueva cultura política empezaba a cristalizar de forma más nítida. Y, en consecuencia, mermaba con más fuerza la hegemonía de la Cultura de la Transición. Si a todo ello le sumamos el componente generacional, obviamente crucial para entender los cambios políticos de los últimos años, tenemos todos los ingredientes para comprender lo que está pasando.

No hay adanismo en esta nueva cultura política. Al fin y al cabo esta cultura política está constituida de las viejas demandas participativas del movimiento republicano, socialista y libertario. Hoy todo ello va emergiendo, mutando y cristalizando en determinados fenómenos políticos, a veces electorales y otras veces no-electorales.

El 15M y la quiebra de los paradigmas políticos surgidos de la Transición

El espacio de oportunidad política de cambio es también una quiebra de la cultura de la transición en favor de una nueva cultura política que exige más y mejor democracia. Ello supone también la creación de un nuevo marco de identificaciones políticas subjetivas que complementan al eje izquierda-derecha. No porque dicho eje deje de tener importancia en el análisis de las condiciones materiales y la lucha de clases como elemento consustancial al sistema bipartidista. Sino porque hemos de entender que este análisis, por más que sea correcto y parte de nuestro ADN, ha dejado de formar parte de cierta subjetividad popular que también participa de una oportunidad de conquista de una nueva hegemonía que permita desbancar a las clases oligárquicas del poder.

La política se construye por la movilización de voluntades colectivas que se unifican en torno a una concepción del mundo, una concepción que define los parámetros de consenso y acuerdo en torno a las reglas de juego que enmarcan las instituciones y las normas legales e informales de funcionamiento de una sociedad. O que impugna la concepción establecida y aspira a la construcción de un contrapoder que alumbre una nueva concepción del mundo, una nueva hegemonía sobre la que sustentan nuevas instituciones reflejo de un nuevo proyecto de país.

Tratando de explicar el cambio que inaugura el 15M, hay que analizar el discurso fuerza que lo sustenta. A saber, el 15M inaugura un discurso e impugnación a una democracia de base liberal, entendida como la elección de los mejores representantes para la dirección de los asuntos públicos, e inicia una reclamación de transitar hacia una democracia real, de implicación y participación popular en los asuntos públicos. Es una impugnación intuitiva, que no implica de manera automática la suma de las masas en la política que pero es una impugnación que abre un campo de potencial cuestionamiento del modelo que se instauró en la transición y que ha articulado el consenso social de los últimos treinta años. Ha permitido reposicionar la política como asunto de interés para mucha más gente, incorporando a la movilización y la participación amplios sectores que no venían participando y que no tienen tradición política. Hay que enmarcar el origen del consenso social, iniciado con un sentido común de época de tintes socialdemócratas, y que ha transitado hacia un sentido común de época profundamente neoliberal.

No hemos de olvidar, aunque en la impugnación intuitiva no parta de ese análisis, que la brecha de ruptura de ese sentido común neoliberal parte del distanciamiento entre el modelo de sociedad y valores construidos en el discurso público, y las condiciones materiales de existencia de cada vez más gente.

En este sentido, la impugnación intuitiva que inaugura el 15M se enmarca de una manera simplista, pero que opera en la subjetividad popular, en la definición de actores políticos como vinculados al modelo transicional en crisis o potenciales constructores de la alternativa. Así, el eje político que define la posición de la mayoría social dispuesta a contribuir a un cambio de régimen complementa el eje izquierda derecha clásico con el eje dentro-fuera del sistema político, que queda identificado como poco democrático e incapaz de resolver los problemas del país.

Atendiendo al resultado de las elecciones europeas, no podemos dejar de señalar que se confirma la existencia al menos de una volatilidad importante del voto de las fuerzas tradicionales del bipartidismo. Y que la posición final de la

opción electoral se construye en ese marco de alternativa al sistema en crisis. Por tanto, es importante entender dos claves del tiempo político que se abre:

De una parte, que en un marco de nueva cultura política la práctica política de una organización como IU tiene un profundo potencial de ser identificada como alternativa. Sin embargo, no deja de tener una tradición de participación en las estructuras tradicionales, aunque lo haya hecho siempre de forma crítica y con alternativas reales allí donde ha sido fuerza de gobierno. Ello supone que debemos estar en línea con la demanda ciudadana por una nueva cultura política. Por tanto, la apertura, el compromiso con las primarias, con la revocabilidad de mandatos, con la rendición de cuentas y con una práctica política que contribuya a consolidar esa nueva cultura han de ser ejes imprescindibles de nuestra apuesta. Es decir, lo que hemos llamado revolución democrática y social.

De otra parte, que la apuesta por el avance social y electoral de las fuerzas comprometidas con la revolución democrática no puede enmarcarse discursivamente exclusivamente en el eje izquierda-derecha. Ha de entenderse que lo que se ha abierto no es la potencial fuerza de sumas de la izquierda para la consecución del 20% de los votos, sino que lo que se abre es un campo social de impugnación al sistema actual con potencial de transformarse en alternativa electoral y por tanto alternativa de gobierno sobre la que avanzar en la consolidación de esa nueva cultura política que alumbrará una nueva hegemonía como verdadera alternativa de poder.

El marco discursivo es el de más y mejor democracia para un cambio profundo del proyecto de país, la democratización de economía, la soberanía popular frente a las imposiciones de agentes extranjeros, la participación de la ciudadanía en la configuración de los proyectos de cambio, y la asunción de métodos democráticos para la elección de nuevas referencias. Estas han de ser las bases sobre las que avanzar en la convergencia que ha de alumbrar programas políticos entendibles, asumibles por la mayoría social e cambio, y sobre todo, que apelen a la conquista de un futuro de dignidad, frente a un presente de subdesarrollo.

La precarización de la juventud, elemento generacional de la crisis política

Las cifras de paro que afectan a la juventud de hoy reflejan que uno de cada dos jóvenes que quiere trabajar no puede hacerlo. No es extraño que en esta realidad el fenómeno que se ha denominado exilio económico, en el que cientos de miles de jóvenes son expulsados del país por motivos económicos, se convierte en una preocupación social que en ocasiones recalca la atención mediática pero que en la práctica está fuera de la agenda política.

A pesar de las declaraciones de la voluntad política de atajar el problema del paro juvenil, la práctica política determina una evidencia; se asume como parte de la solución al paro juvenil garantizar unas condiciones mínimas de trabajo en cualquier punto de Europa. Esta realidad evidencia el problema de fondo de la crisis actual: se está consolidando y transformando un proyecto neoliberal de país condenado a ser periferia de Europa.

Esta posición de precarización del mercado de trabajo no es nueva, porque no es fruto de esta crisis, sino la consolidación de un modelo de mercado laboral

con un problema estructural desde la crisis de los años 70 que se ha ido paliando a golpe de burbujas y endeudamiento sobre las que se ha sustentado la ficción de una clase media llamada a mantener la paz social por la promesa de unas condiciones de retiro y jubilación garantizadas.

En los datos de paro de la actualidad, donde desde el inicio de la crisis fueron los más jóvenes quienes antes perdieron sus trabajos, vuelve a aparecer un problema estructural nunca abordado y nunca resuelto. A saber, la progresiva precarización del mercado laboral para los jóvenes, en contraste con el aumento del acceso a la formación universitaria como cóctel explosivo para una generación que, a diferencia de las anteriores, ya no espera que aguantar pacientemente esta situación porque no tiene garantía alguna de un acceso futuro a las condiciones de vida dignas propias de la edad adulta, ni mucho menos a un retiro digno cuando les llegue la hora de la jubilación.

Así las cosas, a lo largo de los últimos 30 años, se ha renunciado a intervenir para cambiar un problema estructural de nuestro sistema productivo, y se ha optado por intervenir sobre un mercado laboral en un proceso flexibilizador y precarizador. Con especial impacto para la población que se incorpora de nuevas al mercado de trabajo, cada nueva reforma laboral ha introducido reformas de impacto directo en las condiciones laborales de las nuevas generaciones de trabajadores. Estas reformas van desplazando progresivamente del sistema a los modelos de contratos de estabilidad y con derechos y consolidando un proyecto de país en el que se va retrasando la edad de acceso de las generaciones más jóvenes a las condiciones mínimas de incorporación a la vida adulta. Y a ello se suma la dramática situación de las personas de edad más avanzada que parecen excluidas de forma definitiva del mercado de trabajo.

El remate se produce en el estallido de la crisis actual, en el que no es que se retrase el acceso a la vida adulta, sino que se evidencia la ausencia absoluta de garantías de acceso. Muchos jóvenes de hoy sienten que no tendrán nunca un trabajo que les permita desarrollar un proyecto de vida autónomo. Así las cosas, quienes hoy son la juventud española es aquella generación que han sido formadas en los años de bonanza económico y teórica modernización del país, pero no encuentran un espacio laboral acorde con su formación. Por tanto, se inicia un doble proceso, de un lado se empuja a una parte de la población juvenil a asumirse como parte de una clase trabajadora globalizada, disponible para saltar de país en país en función de la mejor oportunidad para el desarrollo profesional. De otro lado, se inicia un proceso de regresión en la apuesta por la universalización de la educación superior, reduciendo cada vez más la formación de los jóvenes para adecuar sus expectativas futuras a la disponibilidad real de un sistema productivo que renuncia a competir en tecnología y producción industrial en favor del sector servicios.

En definitiva, son tiempos de ruptura en los que las nuevas generaciones saben que el modelo de sociedad heredado no sirve para el futuro y por tanto disputan la construcción de un nuevo proyecto. En esa disputa política entre lo viejo y lo nuevo hay una conexión generacional propia de las experiencias de vida compartidas por un conjunto de grupos sociales criados en democracia bajo la promesa de un futuro de éxitos, pero frenados en su conquista de los mismos. A esa conexión generacional es importante disputarle la idea concreta del proyecto a construir, pues la mera sustitución de una generación por otra no garantiza la

conquista de un futuro de bienestar para las mayorías, sino que es la apertura de una oportunidad de cambio sobre la que hay que consolidar el liderazgo de una unidad generacional que dispute la hegemonía del nuevo proyecto de país.

5. El instrumento: Izquierda Unida y la unidad popular

Si hay que construir un nuevo país, tendremos que hablar del instrumento para llevarlo a cabo. Y, en particular, del papel de IU en ese proceso. Resultaría ocioso resaltar aquí que IU nació, hace ahora 28 años, en una coyuntura de crisis de país (entrada en la OTAN, reestructuración económica y primera crisis de la política y del sistema de partidos de entonces) y de crisis del PSOE, hegemónico hasta entonces en la izquierda. Un contexto oportuno y que demandaba la necesidad de construir un proyecto alternativo de izquierdas.

Esa coyuntura y esa necesidad determinó el nacimiento de un proyecto político, Izquierda Unida, que tenía, cuando menos, las siguientes características: su carácter unitario superador de la fragmentación existente hasta ese momento; la creación de un movimiento político y social (que pretendía trascender a la forma partido clásica), el carácter participativo y novedoso en las formas de la política de dicho movimiento; la independencia de su proyecto respecto a otras izquierdas y el Programa, y no la identidad ideológica, como elemento constitutivo y unificador del movimiento político y social que pretendía ser. Ese y no otro es el ADN de IU.

Por tanto, cuando hablamos de convergencia hoy lo hacemos desde la más absoluta fidelidad y lealtad a nuestros orígenes. Ningún miedo debería atenazaros. Convergencia es nuestra historia misma.

Sin embargo, es cierto que la historia de IU no es ajena a las crisis y las deficiencias que dentro de esos elementos constitutivos hemos tenido a lo largo de éste tiempo. No siempre lo unitario ha primado en nuestra política. Aún distamos mucho de ser un movimiento político y social, pues a veces los procesos participativos no han sido lo esencial de nuestro método de trabajo y en momentos determinados, a veces, ha peligrado hasta la misma independencia de nuestro proyecto político como tal izquierda. Pero han sido los avatares de nuestra historia que, en su momento, han sido revisados y criticados con acierto en nuestras Asambleas. Aún así, nunca hemos perdido nuestra referencia fundacional, la apelación a lo que podríamos denominar nuestro *ADN constitutivo*.

El despliegue planificado y tenaz del proyecto neoliberal en Europa y en España, la envergadura de la crisis económica, las limitaciones de una IU que ya analizamos en nuestra IX Asamblea, la crisis de la socialdemocracia en Europa y del proyecto del zapaterismo como alternativa nos llevó a formular la apuesta de la Refundación de IU, eje de nuestra IX y X Asamblea. El objetivo de la misma no era otro que volver a los orígenes de IU y responder a un cambio de época en el que se concentraban efectivamente y como hemos analizado los siguientes elementos: crisis del modelo productivo, del modelo político y de representación política, de los paradigmas sobre los que se construyeron los imaginarios colectivos surgidos de la Transición del 78. La hemos denominado con todas sus letras: crisis de Régimen. Por tanto, una IU para un tiempo nuevo.

Este Encuentro Político no puede sino reafirmar aquello que ya han sancionado nuestras Asambleas: la crisis de Régimen apunta, con todas las consecuencias, a un cambio de época. O damos una salida alternativa y global a la crisis engendrada en el seno de las políticas neoliberales o el país que heredarán las generaciones futuras será del todo irreconocible en lo económico, social, cultural o político. Porque el neoliberalismo es un proyecto político, necesitado de la hegemonía en todos esos terrenos, para imponer lo que no es sino la dictadura de los mercados.

IU está llamada a responder a ese literal reto histórico. Como en su día lo hizo con relación a los que le dieron nacimiento. Y es que un contrapoder se va organizando. Poco a poco van cobrando fuerza proyectos políticos antagónicos al del bipartidismo. Son proyectos de emancipación social. Las asambleas ciudadanas se llenan de debates ilusionantes como nunca antes. ¿En qué país queremos vivir? ¿Cómo y quiénes lo transformaremos? Construir un nuevo proyecto de país, esa es la necesidad política. Y también el reto de IU.

El bloque social y político: hegemonía

Por eso en nuestras IX y X Asambleas hemos acertado en la necesidad de conformar un Bloque Social y Político como el mejor instrumento de intervención y lucha por la hegemonía, en todos los terrenos (económico, social, cultural y político) y para conformar un nuevo proyecto de país.

IU se ha situado de nuevo en la Alternativa y en la propuesta de convergencia unitaria. Y es el terreno en el que nos hemos comprometido a volcar nuestro trabajo en los próximos tiempos.

Sabemos que el Bloque Social y Político, en su sentido fuerte, no es meramente política de alianzas (mucho menos la visión reduccionista de acuerdos electorales). Dicho de otra manera: que no construiremos un imaginario, una visión y propuesta alternativa de país a través meramente de las alianzas con fuerzas que comparten o pueden compartir (siendo ciertamente eso ello muy importante) un *Programa Común*. Eso, en última instancia, sería la expresión orgánica de un modelo de sociedad que deberíamos estar construyendo aquí y ahora. Hay que aceptar que hemos prestado poca atención a esas tareas en la medida en que hemos abandonado demasiado nuestra raíz de movimiento político y social y hemos asimilado en exceso la forma y métodos de un partido al uso.

Queda por tanto mucha tarea a hacer en la propuesta y despliegue económico alternativo frente a una economía que opera en función, exclusivamente, de los intereses del capital financiero en los términos que hemos analizado anteriormente. Mucha tarea en construir una sociedad civil alternativa y tramar y ampliar redes de la ya existente. Mucha propuesta alternativa al modo de distribución y consumo cultural existente y, finalmente mucho cambio político para afrontar la necesidad de raíces fuertes del tipo de democracia que queremos en el siglo XXI. No es tarea del Encuentro que celebramos profundizar en estas cuestiones, quizás sí constatar que ésta sea una tarea fundamental de nuestra próxima Asamblea.

Resulta obvio que deberíamos dar los pasos necesarios para construir ese Bloque Social y Político (incluso en ese orden: primero social y, en

consecuencia, político). Lo hemos teorizado y hemos afirmado que lo haremos de hacer con otros. Queremos construir una unidad popular, no sólo presente en las elecciones sino también en el imaginario colectivo. Le hemos dado el carácter de tarea histórica. Y claro está, no tarea de un día. Pero de lo que resolvamos en este Encuentro Político depende y mucho que avancemos de forma muy significativa o que el Bloque Social y Político sea una formulación más de nuestros documentos Asamblearios.

Decíamos que cuando abordamos nuestra Refundación lo hicimos para responder a los retos de un momento histórico determinado, y hoy esos retos siguen aún más vigentes. El pueblo está más necesitado que nunca de la Alternativa.

Todos nuestros documentos asamblearios, en concreto desde la IX Asamblea, y toda nuestra cultura política desde nuestro nacimiento están impregnados de un mismo principio: somos un instrumento para servir a los intereses del pueblo, no somos un fin en sí mismo.

Izquierda Unida ante el momento histórico: riesgos y oportunidades

El devenir del tiempo político ha situado el reto de la política electoral por delante de los retos de construcción social alternativa de la que hablábamos. Y debemos responder a ese reto. Para IU el momento no sólo ofrece riesgos sino también oportunidades. El especial momento político del país, la acentuación de la crisis del régimen desde las elecciones del 25M (con la abdicación del Rey y la emergencia del imaginario republicano, consolidación de la crisis bipartidista, prolongación de la crisis económica, cambios en el PSOE, emergencia de nuevas formaciones políticas, etc.) han situado en amplísimos sectores de la ciudadanía *la urgencia de una Alternativa*. Ni más ni menos: aquello por lo que hemos venido trabajando tan denodadamente durante tantos años.

Decíamos que las alianzas son una parte del desarrollo del Bloque Social y Político. Hemos analizado que, en este tiempo y con todas sus contradicciones, se han fraguando en huelgas generales, el movimiento 15M, las mareas, lucha contra los desahucios, las Marchas de la Dignidad, etc., con toda la bondad de las alianzas que se conforman pluralmente y desde abajo. Y en todas ellas ha estado IU, con toda su fuerza y su reconocimiento. Y en todos esos ámbitos hemos constatado que se han salvado incomprendiones de primera hora y sus contradicciones. Así que nuestro propósito es posible. Es más, las movilizaciones han dado un salto cualitativo fundamental de modo natural: han demandado de la intervención en el terreno de la política. Aquello, también, que nosotros habíamos esperado en todo éste tiempo. No de otra manera cabe interpretar parte del fenómeno Podemos, nuestros propios resultados el 25 M o, en otro orden, las candidaturas impulsadas con el genérico de GANEMOS.

Así pues, también el marco de la confrontación política es un terreno más que importante para la derrota política de las políticas neoliberales, para tender redes alternativas de poder popular y para la lucha estratégica por la hegemonía.

Y es que la necesidad de un proyecto de emancipación para la mayoría social, que combata las intenciones de la élite económica y política y de sus alquimistas sociales, requiere el acompañamiento de una nítida intención política. Es decir, el tiempo histórico exige estar a la altura política. La izquierda tiene la obligación

moral de aprovechar la oportunidad histórica para cambiar la historia misma. Para cambiar el futuro. Y ello impone una realidad incontestable: la unión de fuerzas en lo político, cultural y electoral es el instrumento imprescindible para lograrlo. Es decir, la unidad popular.

Al fin y al cabo, la confluencia se construye desde abajo. Se construye en la defensa de lo público y en la conquista de los derechos en las calles. En las huelgas generales, en las manifestaciones, en las mareas ciudadanas y en los piquetes. También se construye en lo cultural, compartiendo reflexiones y debates y aceptando en nuestra mente la posibilidad del éxito. Es decir, convirtiendo nuestra concepción del mundo, de ese otro mundo posible y necesario, en el sentido común de la sociedad. Pero también se construye en las instituciones públicas ya constituidas. Luchar juntos en las instituciones lo que luchamos juntos en la calle y en las ideas. Ganar las elecciones es el medio con el que buscamos construir un fin, que es el de transformar la sociedad. Un nuevo proyecto de país.

De ahí que estemos en condiciones de asegurar que la victoria pasa necesariamente por la constitución de un bloque democrático para la transformación social. Un bloque democrático que en lo político, lo cultural y lo electoral pueda frenar a la élite económica y política y pueda a su vez darle la vuelta a este mundo que está patas arriba.

La Convergencia por la que hemos apostado tiene una fecha y meta inmediata: las municipales y autonómicas del 2015 y el horizonte político de las generales del 2015. Y es en la meta donde debemos volcar nuestra apuesta: quebrar el proyecto que los poderosos de éste país y de Europa han previsto. El guión que han escrito por nosotros .

Frente a un debate que puede abrirse, como hemos visto, nuestra estrategia de Convergencia es anterior a cualquier iniciativa del PP tendente a modificar la ley electoral para blindar su poder y taponar la crisis bipartidista. Es más, la osadía con la que el PP reacciona ante cambios de fondo del panorama político del país, para sostener el Régimen, nos debería abrir los ojos acerca de lo profundo de la crisis que constatan. No podemos ser menos audaces en el aprovechamiento de las oportunidades.

Hablamos de oportunidades como pocas veces se nos han dado. Efectivamente, el 25 M ha cambiado los parámetros de intervención política, ha asestado un duro golpe al marco referencial de la Transición y acentuado la crisis bipartidista. También abre interrogantes a cómo IU debe situarse en la actual coyuntura.

Riesgo cierto, Izquierda Unida no tiene más que uno: no ser coherentes con su política, con lo aprobado en sus recientes Asambleas, con lo mejor de su cultura política, con el análisis autocrítico de 25M del Consejo Político Federal y con la responsabilidad que se nos demanda por parte de la ciudadanía. Ni podemos ni vamos a menospreciar ese peligro

Vamos a volcarnos en la Convergencia porque ésta es necesaria para conformar plataformas electorales que, sin IU, carecerán de extensión territorial suficiente, o no podrán aprovechar suficientemente la coherencia del trabajo

positivo desarrollado en multitud de Ayuntamientos y no alcanzarían la fuerza suficiente, tampoco, para ser Alternativa al bipartidismo .

Por tanto, el Encuentro Político de IU puede apostar por extender candidaturas que deben responder a tres criterios:

- *Candidaturas para ganar. Es posible si empoderamos al pueblo.*

- *Candidaturas para cambiar de raíz los municipios pero también para quebrar la hegemonía del bipartidismo en aquellas CCAA donde se celebren elecciones autonómicas. No es posible sustentar la idea y la aspiración de la Alternativa para los municipios y no concretarla para unas CCAA o Diputaciones que van a ser decisivas para esas mismas aspiraciones municipales. No deberíamos votar una cosa en la urna de la derecha y otra diferente en la de la izquierda. Se diluiría la fuerza de la Alternativa. De cualquier modo, debería ser ésta, si se diera, una excepción a la regla. En todo caso, esa no puede ser la apuesta de IU.*

- *Para nosotros el carácter de las candidaturas debería ser: de apertura a la ciudadanía, a los movimientos sociales y de reconocimiento del papel singular que objetivamente tienen los Partidos políticos que se impliquen en el proyecto.*

Derrotar el bipartidismo en mayo 2015, abrir la perspectiva de cambio y esperanza en el país, asentar desde lo local y desde los gobiernos autónomos políticas diferentes a la hegemonía PP de estos años será un paso trascendental para derrotar al PP en el Gobierno de España 8 meses después y, consecuentemente, abrir la perspectiva, más estratégica, de impulsar desde los gobiernos políticas tendentes a la alternativa de país que hemos teorizado.

Una derrota en ese horizonte, por el contrario, supondría años de hegemonía del Régimen y lo que es peor: la hegemonía del proyecto neoliberal en su conjunto. Su consecuencia: un país de oligarcas desmontando absolutamente lo construido con la lucha del movimiento popular durante décadas. Un país irreconocible para la inmensa mayoría de nosotros.

Nosotros no tenemos miedo, sino ilusión. Hemos creído siempre en el proyecto de Izquierda Unida aún cuando los espejismos económicos e ideológicos inundaban el panorama político. Cuando el proyecto bipartidista sentaba las bases de la Unión Europea neoliberal, nosotros lo combatimos. Cuando el bipartidismo consolidó las prácticas caciquiles y corruptas, nosotras las combatimos. Aún cuando otrora revolucionarios se sumaban a la proclama de que el fin de la historia había llegado, y pasaban a engrosar las filas del progresismo ingenuo, nosotros permanecemos ahí. Incrédulos con los cantos de sirena del sistema, desconfiados ante los avances electorales, nuestros principios y valores socialistas permanecieron inalterados. Lo hicieron antes y lo harán ahora, porque creemos firmemente en la necesidad y posibilidad de emancipación de la mayoría social. De emancipación frente al banquero, al rey, al patriarcado, al cacique y al capitalismo.

Nuestra tradición política lleva inscrita en su ADN la formación de bloques democráticos de contrapoder al poder. De bloques populares que frenen a la oligarquía que en cada momento histórico trata de arrebatarnos las conquistas

sociales que arrancaron al poder nuestras madres y abuelos. Por eso tenemos claro que queremos aprovechar la oportunidad y convertir un momento de emergencia social en un momento de esperanza política para la mayoría social. Porque sí, se puede, pero sobre todo porque se necesita.

Somos nosotros y nosotras las llamadas a construir la historia que no está escrita. Es posible. Es necesario. Y es la tarea de IU . Vamos a hacerlo.